

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

83ª REUNIÓN — 2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA (Continuación) — 18 DE DICIEMBRE DE 1996

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación,
doctor CARLOS F. RUCKAUF,
del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor EDUARDO MENEM
y del señor vicepresidente del Honorable Senado,
doctor ANTONIO CAFIERO

Secretarios: doctor EDGARDO R. PIUZZI y doctora MATILDE DEL VALLE GUERRERO

Prosecretarios: señor MARIO L. PONTAQUARTO y doctor DONALDO A. DIB

PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.
AGÚNDEZ, Jorge A.
ALASINO, Augusto
ALMIRÓN, Carlos H.
AVELÍN, Alfredo
BAUM, Daniel
BAUZA, Eduardo
BERHONGARAY, Antonio T.
BRANDA, Ricardo A.
BRAVO, Leopoldo
CABANA, Fernando V.
CAFIERO, Antonio F.
CANTARERO, Emilio M.
COSTANZO, Remo J.
DE LA ROSA, Carlos L.
DE LA SOTA, José M.
FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina E.
FERNÁNDEZ MEIJIDE, Graciela
FIGUEROA, José O.
GAGLIARDI, Edgardo J.
GALVÁN, Raúl A.
GENOUD, José
GIOJA, José L.
HUMADA, Julio C.
LEÓN, Luis A.
LOSADA, Mario A.
LUDUEÑA, Felipe E.
MAC KARTHY, César
MANFREDOTTI, Carlos
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.
MASSACCESI, Horacio
MASSAT, Jorge
MAYA, Héctor M.
MELGAREJO, Juan I.
MENEGHINI, Javier R.
MENEM, Eduardo

MIRANDA, Julio
MOREAU, Leopoldo R. G.
OUDIN, Ernesto R.
OYARZÚN, Juan C.
PARDO, Angel F.
PEÑA de LÓPEZ, Ana M.
PRETO, Ruggero
QUINZIO, Bernardo P.
REUTEMANN, Carlos A.
RIVAS, Olijela del Valle
ROMERO FERIS, José A.
SALA, Osvaldo R.
SALUM, Humberto E.
SAN MILLÁN, Julio A.
SAPAG, Felipe R.
SOLANA, Jorge D.
STORANI, Conrado H.
TELL, Alberto M.
ULLOA, Roberto Augusto
USANDIZAGA, Horacio
VAQUIR, Omar M.
VERNA, Carlos A.
VILLARROEL, Pedro G.
VILLAVEVERDE, Jorge A.
YOMA, Jorge R.
ZALAZAR, Horacio A.

AUSENTES, CON AVISO:

BITTEL, Deolindo F.
LÓPEZ, Alcides H.
MAGLIETTI, Alberto Ramón
MARANGUELLO, Pedro C.
SÁEZ, José M.

POR ENFERMEDAD:

VACA, Eduardo P.

POR SUSPENSION:

ANGELOZ, Eduardo C.

LAS REUNIONES 81ª Y 82ª, PERTENECEN A SESIONES EN TRIBUNAL

SUMARIO

1. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 1997 (C.D.-106/96). Se aprueba. (Pág. 8116.)
2. Lectura del decreto del Poder Ejecutivo por el que se amplía el temario de sesiones extraordinarias. (Pág. 8197.)
3. Consideración de las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fuera pasado en revisión sobre modificaciones en las leyes de procedimiento tributario, de impuestos al valor agregado, de ganancias y de internos por las que se autoriza a la DGI para instrumentar una serie de normas tendientes al cumplimiento de las obligaciones fiscales (P.E.-706/96). Se aprueba. (Pág. 8197.)
4. A moción del señor senador Branda se considera y se aprueba el dictamen de las comisiones de Legislación General, de Asistencia Social y Salud Pública, de Industria y de Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley en revisión sobre confidencialidad de la información técnica referida a productos que se comercializan en el mercado nacional, en particular a los vinculados con especialidades medicinales o farmacéuticas (C.D.-142/96). (Pág. 8201.)
5. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios, de Interior y Justicia y de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de ley en revisión sobre Cooperación Internacional en Materia Penal. (C.D.-128/95). Se aprueba. (Pág. 8211.)
6. Manifestaciones del señor senador Alasino sobre el plan de labor. (Pág. 8225.)
7. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se modifica la ley 24.146 y su modificatoria, ley 24.383, sobre transferencia de inmuebles propiedad del Estado nacional (C.D.-136/96). Se aprueba. (Pág. 8225.)
8. Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación del señor senador Zalazar y otros señores senadores por el que se solicita se declare en emergencia agropecuaria a diversos departamentos del Chaco afectados por las inundaciones (S.-2.688/96). Se aprueba. (Pág. 8227.)
9. A moción del señor senador Yoma se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de comunicación del que es autor por el que se solicita que por intermedio del señor jefe de Gabinete de Ministros se arbitren las medidas correspondientes para compensar desfases del presupuesto 1997 asignado al Poder Judicial y al Ministerio Público (S.-2.696/96) (Pág. 8228.)

10. Consideración del proyecto de comunicación de los señores senadores Fernández Meijide y Villarroel por el que se solicita la derogación de la resolución 1.005 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (S.-2.656/96). Se aprueba. (Pág. 8229.)

11. Por indicación de la Presidencia se pasa a cuarto intermedio para constituir la Cámara en Tribunal de Juicio Político. (Pág. 8230.)

12. Apéndice:

I. Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 8230.)

II. Inserciones. (Pág. 8231.)

—En Buenos Aires, a las 10 y 59 del miércoles 18 de diciembre de 1996.

Sr. Presidente. — Continúa la sesión.

I

PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL

Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 1997. (Orden del Día N° 1.725.)

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (PiuZZi). — (Lee)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de Diputados (C.D.-106/96), sobre presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 1997; y, por las razones que dará el miembro informante os aconsejan su aprobación.

De conformidad con el artículo 120 del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores el presente dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 3 de diciembre de 1996.

Carlos A. Verna. — Ricardo A. Branda.
— César Mac Karthy. — Bernardo P.
Quinzio. — Jorge J. Massat. — Augusto
Alasino. — Emilio M. Cantarero. — José
L. Gioja. — Héctor M. Maya. — Jorge A.
Villaverde. — José O. Figueroa.

En presidencia parcial:

José A. Romero Feris. — Luis A. León.

Sr. Gioja. — Señor presidente: como soy autor de un proyecto de ley que tiene que ver con el tema que consideramos, que está contenido en el expediente S.-1.674/96, solicito a la Presidencia del cuerpo que se inserte mi discurso sobre este tema en el Diario de Sesiones.

Sr. Presidente. — Oportunamente se habrá de votar su pedido de inserción, señor senador.

Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. León. — Señor presidente: es para agregar a los conceptos tan humanos vertidos por el señor senador por San Juan, que a los pocos días de que una empresa americana comprara importantes empresas de medicina prepaga de nuestro país, éstas aumentaron sus tarifas en el orden del 100 por ciento.

Quería manifestar esto en relación con lo que preocupa al señor senador por San Juan.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — En consideración en particular.

—Se enuncian y aprueban los artículos 1° a 6°.

—Se enuncia el artículo 7°.

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza del bloque de la Unión Cívica Radical.

Sr. Genoud. — El texto que proponemos respecto de este artículo es el que está contenido en el dictamen de minoría que informó el bloque radical y al que me referí en mi exposición en general.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Branda. — No vamos a aceptar el agregado propuesto para este artículo.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 7° según la redacción originaria.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncian y aprueban los artículos 8° a 15.

—El artículo 16 es de forma.

Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

Corresponde votar ahora las inserciones solicitadas.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Se procederá en consecuencia¹.

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Es para dejar constancia de que el bloque radical, en el artículo 14 y según mi exposición inicial, proponía el plazo de transición por cinco años, que fue eliminado del dictamen originario.

Sr. Presidente. — Se deja constancia, señor senador.

5

COOPERACION INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL

Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios, de Interior y Justicia y de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de ley en revisión sobre Cooperación Internacional en Materia Penal. (Orden del Día N° 1.564.)

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Piuzzi). — (*Lee*)

Dictamen de comisiones

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios, de Interior y Justicia y de Relaciones Exteriores y Culto han considerado el proyecto de ley venido en revisión (C.D.-128/95) sobre Cooperación Internacional en Materia Penal; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan su sanción.

De conformidad con lo establecido por el artículo 120 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 9 de octubre de 1996.

Bernardo P. Quinzio. — Juan R. Aguirre Lanari. — Eduardo Menem. — Jorge A. Agúndez. — Luis A. León. — Jorge D. Solana. — Enrique Martínez Almudevar. — Olijela del Valle Rivas. — Cristina Fernández de Kirchner. — Angel F. Pardo. — Carlos L. de la Rosa. — Omar M. Vaquir. — Pedro G. Villarroel. — Antonio T. Berhongaray. — Mario A. Losada.

¹ Ver el Apéndice.

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

(7 de diciembre de 1995)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

LEY DE COOPERACION INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL

PARTE I

Disposiciones generales

Artículo 1º — La República Argentina prestará a cualquier Estado que lo requiera la más amplia ayuda relacionada con la investigación, el juzgamiento y la punición de delitos que correspondan a la jurisdicción de aquél.

Las autoridades que intervengan actuarán con la mayor diligencia para que la tramitación se cumpla con una prontitud que no desnaturalice la ayuda.

Art. 2º — Si existiera un tratado entre el Estado requerente y la República Argentina, sus normas regirán el trámite de la ayuda.

Sin perjuicio de ello, las normas de la presente ley servirán para interpretar el texto de los tratados.

En todo lo que no disponga en especial el tratado se aplicará la presente ley.

Art. 3º — En ausencia de tratado que la prescriba, la ayuda estará subordinada a la existencia u ofrecimiento de reciprocidad.

Art. 4º — Las solicitudes y demás documentos que con ellas se envíen se presentarán traducidas al español.

La documentación remitida por vía diplomática no requerirá legalización.

La presentación en forma de los documentos hará presumir la veracidad de su contenido y la validez de las actuaciones a que se refieran.

Art. 5º — Para determinar la competencia del país requerente respecto del delito que motiva el requerimiento de ayuda se estará a su propia legislación.

No constituirá obstáculo para brindar la ayuda la circunstancia que el delito cayere también bajo la jurisdicción argentina.

Sin embargo, en caso que la ayuda consistiere en una extradición, la procedencia del pedido estará condicionada a lo dispuesto en el artículo 23.

PARTE II

Extradición

TITULO I

Extradición pasiva

CAPÍTULO I

Condiciones generales

Art. 6º — Para que proceda la extradición de una persona, el hecho materia del proceso deberá constituir un delito que tanto en la ley argentina cuanto en la del Estado requerente tenga prevista una pena privativa de li-

bertad con mínimo y máximo tales que su semisuma sea al menos de un año.

Si un Estado requiriese una extradición por varios delitos, bastará que uno de ellos cumpla con esta condición para que la extradición pueda ser concedida respecto de los restantes.

En caso que la extradición se solicitara para el cumplimiento de una pena, se requerirá, además, que la pena que faltare cumplir fuese no menor de un año de privación de libertad en el momento en que se presente la solicitud.

Art. 7º — Si el delito estuviese previsto en leyes penales en blanco, el requisito de doble incriminación se satisfará en relación con ellas, aun cuando fueren diferentes las normas extrapenales que completen la descripción de la acción punible.

Art. 8º — La extradición no procederá cuando:

- a) El delito que la motiva fuese un delito político;
- b) El delito que motiva la extradición fuese un delito previsto exclusivamente por la ley penal militar;
- c) El proceso que la motiva fuere tramitado por una comisión especial de las prohibidas por el artículo 18 de la Constitución Nacional;
- d) El proceso que motiva la extradición evidencie propósitos persecutorios por razón de las opiniones políticas, la nacionalidad, la raza, el sexo o la religión de las personas involucradas, o hubiese motivos fundados para suponer que esas razones pueden perjudicar el ejercicio del derecho de defensa en juicio;
- e) Existan motivos fundados para suponer que el requerido pueda ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
- f) El delito por el que se solicita la extradición tuviere pena de muerte en el Estado requerente y éste no diere seguridades de que no será aplicable.

Art. 9º — No se considerarán delitos políticos:

- a) Los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad;
- b) Los atentados contra la vida, la integridad corporal o la libertad de un jefe de Estado o de gobierno, o de un miembro de su familia;
- c) Los atentados contra la vida, la integridad corporal o la libertad de personal diplomático o de otras personas internacionalmente protegidas;
- d) Los atentados contra la vida, la integridad corporal o la libertad de la población o del personal civil inocente no comprometido en la violencia generada por un conflicto armado;
- e) Los delitos que atenten contra la seguridad de la aviación o la navegación civil o comercial;
- f) Los actos de terrorismo;
- g) Los delitos respecto de los cuales la República Argentina hubiera asumido una obligación convencional internacional de extraditar o enjuiciar.

Art. 10. — Tampoco procederá la extradición cuando existan especiales razones de soberanía nacional, seguridad u orden público u otros intereses esenciales para la

Argentina, que tornen inconveniente el acogimiento del pedido.

Art. 11. — La extradición no será concedida:

- a) Si la acción penal o la pena se hubiesen extinguido según la ley del Estado requirente;
- b) Cuando la persona reclamada ya hubiese sido juzgada, en la Argentina o cualquier otro país, por el hecho que motiva el pedido;
- c) Cuando la persona reclamada habría sido considerada por la ley argentina como inimputable por razón de la edad si hubiese cometido el delito en la Argentina;
- d) Cuando la condena se hubiese dictado en rebeldía y el Estado requirente no diese seguridades de que el caso se reabrirá para oír al condenado, permitirle el ejercicio del derecho de defensa y dictar en consecuencia una nueva sentencia;
- e) Si el Estado requirente no diere seguridades de que se computará el tiempo de privación de libertad que demande el trámite de extradición, como si el extraditado lo hubiese sufrido en el curso del proceso que motivó el requerimiento.

Art. 12. — Si el requerido para la realización de un proceso fuese nacional argentino, podrá optar por ser juzgado por los tribunales argentinos, a no ser que fuere aplicable al caso un tratado que obligue a la extradición de nacionales.

La calidad de nacional argentino deberá haber existido al momento de la comisión del hecho, y deberá subsistir al momento de la opción.

Si el nacional ejerciere esta opción, la extradición será denegada. El nacional será entonces juzgado en el país, según la ley penal argentina, siempre que el Estado requirente preste conformidad para ello, renunciando a su jurisdicción, y remita todos los antecedentes y pruebas que permitan el juzgamiento.

Si fuere aplicable al caso un tratado que faculta la extradición de nacionales, el Poder Ejecutivo, en la oportunidad prevista en el artículo 36, resolverá si se hace o no lugar a la opción.

Art. 13. — La solicitud de extradición de un imputado debe contener:

- a) Una descripción clara del hecho delictivo, con referencias precisas acerca de la fecha, el lugar y circunstancias en que se cometió, y sobre la identificación de la víctima;
- b) La tipificación legal que corresponde al hecho;
- c) Una explicación acerca del fundamento de la competencia de los tribunales del Estado requirente para juzgar el caso, así como de las razones por las cuales la acción penal no se encuentra extinguida;
- d) Testimonio o fotocopia autenticada de la resolución judicial que dispuso la detención del procesado, con explicación de los motivos por los que se sospecha que la persona requerida habría tomado parte en el delito, y de la que ordenó el libramiento de la solicitud de extradición;

e) Texto de las normas penales y procesales aplicables al caso, en cuanto estén vinculados con los párrafos anteriores;

f) Todos los datos conocidos que identifiquen al reclamado, tales como nombre y apellido, sobrenombres, nacionalidad, fecha de nacimiento, estado civil, profesión u ocupación, señas particulares, fotografías e impresiones digitales, y la información que se tenga acerca de su domicilio o paradero en el territorio argentino.

Art. 14. — La solicitud de extradición de un condenado se ajustará a lo dispuesto en el artículo anterior, con las siguientes particularidades:

- a) Testimonio o fotocopia autenticada de la sentencia judicial que impuso la condena;
- b) Atestación de que dicha sentencia no se dictó en rebeldía y se encuentra firme. Si la sentencia se hubiese dictado en rebeldía deberán darse las seguridades previstas en el artículo 11, inciso d);
- c) Información acerca del cómputo de la pena que resta ser cumplida;
- d) Explicación de las razones por las cuales la pena no se encuentra extinguida.

Art. 15. — Si varios Estados requiriesen una extradición por el mismo delito, el gobierno establecerá la preferencia valorando, entre otras circunstancias pertinentes, las siguientes:

- a) La existencia de relaciones regidas por tratados de extradición;
- b) Las fechas de las respectivas solicitudes, y en especial el progreso que en trámite hubiese logrado alguna de ellas;
- c) El hecho de que el delito se haya cometido en el territorio de alguno de los Estados requirentes;
- d) Las facilidades que cada uno de ellos tenga de conseguir las pruebas del delito;
- e) La ubicación del domicilio o de los negocios de la persona requerida, que le permitiría ejercitar su derecho de defensa con mayor garantía;
- f) La nacionalidad de la persona requerida;
- g) El hecho de que en el territorio de alguno de los Estados requirentes se domicilie la víctima interesada en el proceso;
- h) Las posibilidades que cada requerimiento tenga de lograr la concesión de la extradición;
- i) La circunstancia de que la clase y el monto de las penas sean coincidentes con la ley argentina, en especial que no se prevea la pena de muerte.

Art. 16. — Si varios Estados reclamaren a la misma persona por distintos delitos, el gobierno determinará la preferencia valorando, además, las siguientes circunstancias:

- a) La mayor gravedad de los delitos, según la ley argentina;
- b) La posibilidad de que una vez concedida la extradición a uno de los Estados requirentes, éste pueda a su vez acceder luego a la reextradición de la persona reclamada hacia otro de tales Estados.

Art. 17. — Sin perjuicio de la preferencia que el gobierno determine, podrá dar curso a más de un pedido.

En tal caso la concesión de una extradición no preferida tendrá los efectos de una reextradición autorizada.

Art. 18. — La persona extraditada no podrá ser encausada, perseguida ni molestada, sin previa autorización de la Argentina, por hechos anteriores y distintos a los constitutivos del delito por el que se concedió la extradición.

Si la calificación del hecho constitutivo del delito que motivó la extradición fuese posteriormente modificada en el curso del proceso en el Estado requirente, la acción no podrá proseguirse sino cuando la nueva calificación hubiese permitido la extradición.

La persona extraditada tampoco podrá ser reextraditada a otro Estado sin previa autorización otorgada por la Argentina.

No será necesaria ninguna de estas autorizaciones si el extraditado renunciare libre y expresamente a esta inmunidad, ante una autoridad diplomática o consular argentina y con patrocinio letrado.

Tampoco serán necesarias cuando el extraditado, teniendo la posibilidad de hacerlo, no abandonare voluntariamente el territorio del Estado requirente dentro de un plazo de treinta días corridos, o cuando regresare voluntariamente a ese territorio después de haberlo abandonado.

CAPÍTULO 2

Procedimiento

Sección 1

Trámite administrativo

Art. 19. — La solicitud de extradición y toda otra documentación que se envíe posteriormente, deberá ser cursada por vía diplomática.

Art. 20. — Si la persona requerida poseyera condición de refugiado y el pedido de extradición proviniera del país que motivó el refugio, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto procederá a devolver la requisitoria sin más trámite con explicación de los motivos que obstan a su diligenciamiento.

Art. 21. — Si no se diera el caso del artículo anterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto dictaminará respecto de las condiciones previstas en los artículos 3º y 10, y sobre los requisitos formales del requerimiento.

En su caso recabará los documentos y datos faltantes reservando la actuación hasta que el Estado requirente subsane las falencias formales.

Art. 22. — Cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto dictaminare dar curso al pedido, le dará trámite judicial a través del ministerio público fiscal.

Si dictaminare que el requerimiento no cumple con alguna condición de admisibilidad, el Poder Ejecutivo resolverá. En caso de que lo acogiere le dará curso. Si lo rechazare, devolverá el pedido al Estado requirente por la vía diplomática, con copia del decreto.

El Poder Ejecutivo podrá delegar esta decisión en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Art. 23. — En el caso previsto en el artículo 5º, último párrafo, el Poder Ejecutivo resolverá si le da o no curso al pedido.

Podrá darle curso cuando:

- a) El delito por el que se requiere la extradición integre una conducta punible significativamente más grave, que fuese de la competencia del Estado requirente y ajena a la jurisdicción argentina, o
- b) Cuando el Estado requirente tuviese facilidades notoriamente mayores que la República Argentina para conseguir las pruebas del delito.

En caso que le diera curso y la extradición fuese finalmente concedida, se archivará el expediente que pudiera estar en trámite ante la justicia argentina.

Si el Estado requirente lo solicitare, le serán enviadas copias del expediente y las pruebas que se hubiesen colectado.

Art. 24. — Las actuaciones del trámite administrativo reglamentado en este capítulo, tendrán carácter de reservadas.

Art. 25. — El ministerio público fiscal representará en el trámite judicial el interés por la extradición.

Sin perjuicio de ello, el Estado requirente podrá intervenir como parte en el trámite judicial por medio de apoderados.

El fiscal, cuando sea notificado de la concesión de un plazo otorgado por el juez para el cumplimiento del algún requisito a cargo del Estado requirente, deberá informarlo de inmediato a las autoridades diplomáticas o consulares de dicho Estado.

Sección 2

Trámite judicial

Art. 26. — Recibido el pedido de extradición, el juez librará orden de detención de la persona requerida, si es que ya no se encontrare privada de su libertad.

En el trámite de extradición no son aplicables las normas referentes a la extinción de prisión o excarcelación, con excepción de los casos expresamente previstos en esta ley.

Art. 27. — Dentro de las 24 horas de producida la detención, el juez realizará una audiencia en la que:

- a) Le informará al detenido sobre los motivos de la detención y los detalles de la solicitud de extradición;
- b) Invitará al detenido a designar defensor entre los abogados de la matrícula, y si no lo hiciere le designará de oficio a un defensor oficial, salvo que lo autorice a defenderse personalmente;
- c) Dejará constancia de sus manifestaciones respecto del contenido de la solicitud de extradición;
- d) Le preguntará si, previa consulta con su defensor, desea prestar conformidad a la extradición, informándole que de así hacerlo pondrá fin al trámite judicial. El detenido podrá reservarse la respuesta para más adelante.

Si el detenido no hablara el idioma nacional, el juez nombrará un intérprete.

En caso que hubiera existido arresto provisorio previo al pedido de asistencia, el juez deberá realizar esta audiencia dentro de las 24 horas de la recepción del pedido.

Art. 28. — En cualquier estado del proceso el requerido podrá dar su consentimiento libre y expreso a ser extraditado. El juez resolverá sin más trámite.

La extradición, entonces, sólo se concederá si el Estado requirente diere seguridades de que en caso que el requerido fuese declarado exento de responsabilidad en el hecho que motiva el pedido, le sufragará los gastos del inmediato viaje de regreso.

A ese fin el juez suspenderá el pronunciamiento y concederá un plazo que no excederá de treinta días corridos, para que el Estado requirente dé tales seguridades.

El requerido podrá renunciar a esta indemnización; en tal caso la extradición se concederá sin espera alguna.

Art. 29. — Si el juez comprobare que la persona detenida no es la requerida, así lo declarará previa vista al fiscal. En tal caso ordenará la captura de la persona correcta, si tuviera datos que permitiesen la búsqueda.

Esta resolución será susceptible del recurso de apelación ante la cámara federal que corresponda.

El recurso tendrá efecto suspensivo, pero el detenido será excarcelado bajo caución, previa vista al fiscal. El juez ordenará entonces la prohibición de salida del país del reclamado.

Art. 30. — Si no se dieran los casos previstos en los dos artículos anteriores, el juez dispondrá la citación a juicio.

El juicio de extradición se llevará a cabo conforme a las reglas que para el juicio correccional establece el Código Procesal Penal de la Nación. El intervalo previsto en el artículo 359 de ese Código, no podrá ser mayor de quince (15) días.

En el juicio no se podrá discutir acerca de la existencia del hecho imputado o la culpabilidad del requerido, restringiéndose el debate a las condiciones exigidas por esta ley, con exclusión de las que surgen de los artículos 3º, 5º y 10.

Art. 31. — Si, hasta el momento de dictar la sentencia, el juez advirtiera la falencia de requisitos de forma en el pedido, suspenderá el proceso y concederá un plazo, que no excederá de treinta días corridos, para que el Estado requirente la subsane.

Art. 32. — El juez resolverá si la extradición es o no procedente. En su caso también resolverá si es procedente la remisión de los objetos que se hubiesen secuestrado conforme lo permite el artículo 46.

Si resolviera que la extradición es procedente, la sentencia se limitará a declarar dicha procedencia. Si resolviera que no es procedente, la sentencia definitivamente decidirá que no se concede la extradición.

Art. 33. — La sentencia será susceptible del recurso de apelación ordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación previsto por el artículo 24 inciso 6º b), del decreto ley 1.285/58 ratificado por ley 14.467.

El recurso tendrá efecto suspensivo; pero si se hubiese denegado la extradición el reclamado será excarcelado bajo caución, previa vista al fiscal. El juez ordenará entonces la prohibición de salida del país del reclamado.

Art. 34. — Una vez firme la sentencia, el tribunal enviará inmediatamente copia de ella al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Si hubiese declarado procedente la extradición, el tribunal también le remitirá al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto una copia del expediente completo.

Sección 3

Decisión final

Art. 35. — Si el tribunal hubiese denegado la extradición, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informará tal circunstancia al Estado requirente, con copia de la sentencia.

Art. 36. — Sin perjuicio de que el tribunal hubiese declarado procedente la extradición, el Poder Ejecutivo resolverá su denegatoria si las circunstancias en ese momento hicieran aplicables las causas previstas en los artículos 3º y 10, o cuando haga lugar a la opción del nacional en el caso previsto por el último párrafo del artículo 12. El Poder Ejecutivo podrá delegar esta facultad en el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

La decisión deberá ser adoptada dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de las actuaciones enviadas por el tribunal. Vencido ese plazo sin que se hubiese adoptado una decisión expresa, se entenderá que el Poder Ejecutivo ha concedido la extradición.

La decisión definitiva será comunicada de inmediato al Estado requirente por vía diplomática. En caso que se hubiese concedido la extradición, se insertarán en la comunicación los condicionamientos prescriptos por los artículos 8º inciso f), 11 inciso e) y 18, y se colocará a la persona reclamada a disposición del Estado requirente.

Art. 37. — Decidida definitivamente la solicitud de extradición, no se dará curso a ningún nuevo pedido basado en el mismo hecho, salvo que no se hubiese accedido a la extradición en razón de la incompetencia del Estado requirente para entender en el delito que motivó el pedido.

En tal caso la extradición podrá ser nuevamente solicitada por otro Estado que se considere competente.

Art. 38. — El Estado requirente deberá efectuar el traslado de la persona reclamada en un plazo de treinta días corridos a partir de la comunicación oficial.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto podrá disponer una prórroga de diez días corridos, a pedido del Estado requirente, cuando éste se viera imposibilitado de realizar el traslado en ese término.

Vencido el plazo sin que se hubiese efectuado el traslado, el requerido será puesto inmediatamente en libertad, y el Estado requirente no podrá reproducir la solicitud.

Art. 39. — La entrega se postergará en la siguientes situaciones:

- a) Si el requerido se encontrare sometido a un proceso penal en trámite o cumpliendo efectivamente una pena privativa de libertad, hasta que el proceso termine o se cumpla la pena. No obstante, el Poder Ejecutivo podrá disponer la entrega inmediata cuando el delito por el que se

concedió la extradición fuese de una entidad significativamente mayor que el que obsta a la entrega, o cuando resultare que la postergación podría determinar la impunidad del reclamado en el Estado requirente;

- b) Si el traslado resultare peligroso para la salud del requerido o de terceros a causa de una enfermedad, hasta que se supere ese riesgo.

CAPÍTULO 3

Entrega de objetos y documentos

Art. 40. — La solicitud de extradición y, en su caso, de arresto provisorio, podrá extenderse al secuestro de objetos o documentos que estén en poder de la persona requerida y sean:

- a) Elementos probatorios del delito;
- b) Instrumentos del delito o efectos provenientes de él.

Art. 41. — La entrega de estos objetos o documentos al Estado requirente, será ordenada por la resolución que conceda la extradición, en la medida que no afecte derechos de terceros.

Art. 42. — La entrega se ordenará aun cuando la extradición no pudiera ser concedida a consecuencia de la muerte o la evasión de la persona reclamada.

CAPÍTULO 4

Gastos

Art. 43. — Los gastos ocasionados por el transporte internacional de la persona reclamada y de los documentos y objetos secuestrados, serán a cargo del Estado requirente. Los restantes correrán por cuenta de la República Argentina.

CAPÍTULO 5

Arresto provisorio

Art. 44. — El arresto provisorio de una persona reclamada por las autoridades de un Estado extranjero será procedente:

- a) Cuando haya sido solicitado formalmente por una autoridad del país interesado;
- b) Cuando la persona pretenda entrar al país mientras es perseguida por la autoridad de un país limítrofe, o
- c) Cuando la persona fuese reclamada por un tribunal de un país extranjero mediante avisos insertos en los boletines de la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol).

Art. 45. — En el caso del inciso a) del artículo anterior, la solicitud formal de arresto provisorio deberá ser remitida por la vía diplomática o por conducto de la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol), y consignará:

- a) Nombre del sujeto requerido, con todas las circunstancias personales que lo identifiquen y permitan encontrarlo en el país;
- b) Fecha, lugar de comisión y calificación legal del hecho;

- c) Si el requerido fuese un imputado, pena conminada para el hecho que motiva el pedido. Si fuera un condenado, monto de la pena impuesta en la condena firme que faltare cumplir;
- d) La existencia de la orden judicial de prisión;
- e) El compromiso de solicitar formalmente la extradición.

Art. 46. — La solicitud será remitida de inmediato al juez federal competente, con aviso al fiscal que corresponda.

El juez librará la orden de captura a no ser que prima facie no se cumplan las condiciones del artículo 6º, e informará de todo lo actuado al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Art. 47. — En el caso del artículo 44, inciso b), la fuerza pública destacada en los lugares de frontera deberá de inmediato poner al arrestado a disposición del juez federal competente, con aviso al fiscal que corresponda.

El juez inmediatamente informará al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

La persona arrestada recuperará su libertad si en el término de dos días hábiles un funcionario diplomático o consular del país extranjero no requiriese el mantenimiento del arresto. El pedido será presentado directamente al juez, y deberá cumplir las condiciones prescriptas por el artículo 45. La presentación surtirá los efectos de la comunicación del arresto provisorio a fines de lo dispuesto por el artículo 50.

Art. 48. — En el caso del artículo 44 inciso c), los avisos deberán cumplir los requisitos previstos en el artículo 45.

El arrestado deberá ser puesto de inmediato a disposición del juez federal competente, con aviso al fiscal que corresponda e información al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Art. 49. — En todos los casos de arresto provisorio, el juez oír a la persona arrestada dentro del término de 24 horas, y la designará defensor oficial si aquél no designara uno de confianza.

El juez hará cesar el arresto si prima facie no estuviesen cumplidas las condiciones previstas en el artículo 6º. Dispondrá entonces la prohibición de salida del país del requerido y su obligación de comunicar todo cambio de domicilio.

El arresto cesará asimismo en cuanto se comprobare que el arrestado no es la persona reclamada.

Art. 50. — El arrestado será puesto de inmediato en libertad o cesarán las condiciones impuestas según el segundo párrafo del artículo anterior, si transcurrieren treinta días corridos desde la comunicación del arresto provisorio al Estado requirente sin que éste presente el formal pedido de extradición.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto podrá disponer una prórroga de diez días corridos, a pedido del Estado requirente, cuando éste se hubiese visto imposibilitado de presentar en término el pedido de extradición en la forma debida.

Si el trámite administrativo del pedido formal de extradición se demorare, el juez, a pedido de la persona arrestada, fijará un plazo para que se termine. El arrestado será puesto de inmediato en libertad o cesarán las

condiciones impuestas según el segundo párrafo del artículo anterior, si no se diera curso judicial al pedido formal de extradición dentro de dicho plazo.

En estos casos el liberado podrá ser nuevamente detenido por razón del mismo delito siempre que se reciba un formal pedido de extradición.

Art. 51. — Mientras dure el arresto provisorio, el arrestado podrá dar su consentimiento libre y expreso a ser trasladado al Estado requirente. El juez resolverá sin más trámite.

El traslado, entonces, sólo se autorizará si el Estado requirente diere seguridades de que en caso que el requerido fuese declarado exento de responsabilidad en el hecho que motiva el pedido, le sufragará los gastos del inmediato viaje de regreso.

A ese fin el juez suspenderá el pronunciamiento y concederá un plazo, que no excederá de treinta días corridos, para que el Estado requirente dé tales seguridades.

El requerido podrá renunciar a esta indemnización; en tal caso el juez autorizará el traslado sin espera alguna.

Art. 52. — Cuando el juez resolviera autorizar el traslado, enviará copia de la resolución, y del expediente completo, al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

La resolución de autorizar el traslado tendrá todos los efectos de una sentencia que declara procedente la extradición.

CAPÍTULO 6

Reextradición y juzgamiento por otros hechos anteriores

Art. 53. — Las autorizaciones referidas en el artículo 18 sólo se concederán si el delito que motiva el requerimiento habría dado lugar a una concesión de extradición.

La solicitud deberá cumplir las condiciones establecidas en los artículos 13 o 14, y se tramitará conforme el procedimiento previsto para la extradición, con las particularidades que se establecen seguidamente.

Art. 54. — La reextradición puede ser solicitada por cualquiera de los Estados interesados en ella.

Antes de darle al pedido curso judicial, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto deberá diligenciar una audiencia realizada ante una autoridad diplomática o consular argentina, en la que:

- a) Se informe al extraditado acerca del contenido de la autorización solicitada y de las consecuencias que le aparejará la concesión;
- b) Se documenten las defensas que el extraditado, con asistencia letrada, opone a la concesión de la autorización solicitada, o su libre y expreso consentimiento a la autorización;
- c) Se le haga saber al extraditado que tiene derecho a designar un defensor de confianza para que lo represente en el juicio; y que en caso de que no lo haga se le designará un defensor oficial.

Art. 55. — El trámite judicial se iniciará directamente en la instancia a que se refiere el artículo 30.

El extraditado será representado en el juicio por su defensor de confianza o por el defensor oficial. La decisión definitiva le será notificada por medio de una autoridad diplomática o consular argentina, quien le entregará copia de la resolución.

Art. 56. — Si la autorización de reextradición hubiera tramitado por la vía prevista en el artículo 17, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto podrá revocarla, por las causas previstas en los artículos 3º y 10, mientras no se hubiese cumplido.

CAPÍTULO 7

Extradición en tránsito

Art. 57. — Deberá requerirse una autorización de extradición en tránsito, cuando en cumplimiento de una extradición concedida por otro país, la persona extraditada deba transitar por el territorio argentino.

Art. 58. — Si el medio de transporte empleado fuere el aéreo, la autorización será necesaria, solamente cuando tuviere alguna escala prevista en el territorio argentino.

Art. 59. — Con la solicitud se acompañará:

- a) Copia del requerimiento de la extradición que motiva el tránsito;
- b) Copia de la comunicación mediante la cual se notifica la concesión de la extradición que motiva el tránsito.

Art. 60. — La autorización será concedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Sólo será denegada por las causas previstas en los artículos 3º y 10.

Art. 61. — La custodia de la persona en tránsito, dentro del territorio argentino estará a cargo de autoridades nacionales. El Estado requirente deberá reembolsar los gastos que dicha custodia demande a la Argentina.

TÍTULO 2

Extradición activa

Art. 62. — La Argentina requerirá la extradición de una persona cuando prima facie fuere procedente conforme la ley del país donde se encuentra el requerido.

Si el caso se rige por un tratado, se atenderá a las reglas previstas en éste.

Art. 63. — Para solicitar la extradición de un imputado, el juez de la causa deberá librar una orden de detención que contenga la relación precisa de los hechos, la calificación legal que correspondiere y los motivos por los que se sospecha que la persona requerida habría tomado parte en el delito.

Art. 64. — Cuando la extradición requerida fuese denegada por el país extranjero en virtud de una causa que hace procedente el juzgamiento del caso en aquel país, el Poder Ejecutivo resolverá si admite ese juzgamiento.

En caso afirmativo, si el país extranjero lo solicitare, le serán enviadas copias del expediente judicial que se hubiese tramitado y las pruebas colectadas.

Art. 65. — Los jueces remitirán los requerimientos de extradición al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el que antes de darles curso dictaminará sobre su procedencia y solicitará que se satisfagan los requisitos pertinentes.

Art. 66. — El tiempo de privación de libertad que demande el trámite de extradición, será computado en la forma prescripta por el artículo 24 del Código Penal.

PARTE III

Asistencia en la investigación y juzgamiento de delitos

Art. 67. — La procedencia de requerimientos efectuados por una autoridad extranjera para que se la asista en la investigación y juzgamiento de delitos, es regida por los artículos 3º, 5º, 8º, 9º y 10.

Art. 68. — La asistencia será prestada aun cuando el hecho que la motiva no constituyese delito en la Argentina.

No obstante, se requerirá que dicho hecho constituya delito en la Argentina si la asistencia que se requiere consiste en una medida de secuestro de bienes, registro domiciliario, seguimiento de personas, interceptación de correspondencia o intervención de comunicaciones telefónicas.

Art. 69. — La solicitud de asistencia será presentada por la vía diplomática, y deberá contener los siguientes datos:

- a) Autoridad de la que proviene el pedido;
- b) Una descripción clara del hecho delictivo que motiva el pedido, con referencias precisas acerca de la fecha, el lugar y circunstancias en que se cometió, y los datos personales del autor y la víctima;
- c) La tipificación legal y la pena que corresponden al hecho;
- d) El objeto de solicitud y todas las circunstancias cuyo conocimiento sea útil para asegurar la eficacia de la asistencia;
- e) Los datos personales de los funcionarios y representantes de las partes que hayan sido autorizados por el Estado requirente para participar en los procedimientos solicitados. Tal participación será aceptada en la medida en que no contrarie la legislación argentina.

Art. 70. — El procedimiento administrativo en los casos de solicitudes de asistencia, será similar al establecido para los requerimientos de extradición, con las particularidades siguientes.

Art. 71. — Cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto dictaminare dar curso al pedido, dará intervención al Ministerio de Justicia.

Art. 72. — Si el cumplimiento del pedido pudiese entorpecer una investigación penal en trámite en la Argentina, se podrá disponer el aplazamiento o el conveniente condicionamiento de la ejecución, de lo que se informará al Estado requirente.

Art. 73. — La legislación argentina regirá las condiciones y formas en que se llevarán a cabo las medidas requeridas.

Si el Estado requirente tuviere interés en una especial condición o forma de tramitación, lo deberá hacer saber expresamente. En tal caso se accederá a la petición, siempre que no se vulneren garantías constitucionales.

Art. 74. — El Ministerio de Justicia dará intervención a la autoridad que corresponda según el tipo de asistencia solicitada.

Podrá disponer los aplazamientos y condiciones a que se refieren los artículos 72 y 73, y autorizará o no a las personas mencionadas en el artículo 69 párrafo e).

Si la asistencia requiriese la intervención de un juez, el Ministerio Público Fiscal representará el interés por la ayuda en el trámite judicial.

Art. 75. — El pedido que tenga por objeto la citación de un imputado, testigo o perito, para que comparezca ante una autoridad del Estado requirente, deberá ser transmitido con una antelación de al menos cuarenta y cinco días de la fecha de la audiencia.

La citación se notificará sin que surtan efectos las normas conminatorias y sancionatorias previstas por la legislación argentina, a no ser que el citado hubiera percibido un adelanto pecuniario en concepto de gasto del viaje.

En este último caso, si el citado no cumpliera con la comparecencia, será sancionado en la Argentina tal como lo son los testigos que se abstienen de comparecer ante similar autoridad argentina.

Art. 76. — Si el pedido consistiere en el traslado de una persona privada de su libertad en la Argentina para comparecer ante una autoridad del Estado requirente, sólo podrá autorizarse si el requerido prestare su libre y expreso consentimiento, con asistencia letrada.

El Estado requirente deberá mantener en custodia a la persona trasladada, y la devolverá inmediatamente después de haberse cumplido el acto que motivó la solicitud.

Art. 77. — La persona que compareciere a la citación en el Estado requirente, no podrá ser encausada, perseguida ni molestada, sin previa autorización de la Argentina, por un delito cometido con anterioridad a la tramitación del pedido de asistencia, salvo que se dieren los casos previstos en los dos últimos párrafos del artículo 18.

La autorización se regirá por los artículos 53 a 55.

Art. 78. — Si el pedido consistiese en que un imputado, testigo o perito preste declaración en la Argentina, la citación se efectuará bajo las cláusulas conminatorias y sancionatorias previstas en la legislación argentina.

Art. 79. — Si el pedido tuviere por objeto la provisión de documentación o información oficial, se podrá cumplir en la misma medida en que tal documentación o información se brindaría a una similar autoridad argentina.

Art. 80. — El envío de documentos originales u objetos, podrá condicionarse a la oportuna devolución.

Art. 81. — Los gastos de depósitos y envío de objetos, de traslado de personas y de honorarios de peritos, que sean consecuencia del cumplimiento del pedido, serán a cargo del Estado requirente.

PARTE IV

Cumplimiento de condenas

TÍTULO I

Cumplimiento de condenas dictadas en el extranjero

CAPÍTULO I

Condenas privativas de libertad

Art. 82. — Las penas privativas de libertad impuestas por un tribunal de un país extranjero a nacionales argentinos podrán ser cumplidas en la Argentina en las condiciones que prescriben los artículos siguientes.

Art. 83. — La petición de traslado podrá ser presentada por el condenado, por terceros a su nombre o por el Estado que impuso la condena.

Art. 84. — El Ministerio de Justicia decidirá acerca de la petición de traslado.

Para ello tendrá en cuenta todas las circunstancias que permitan suponer que el traslado contribuirá a cumplir los fines de la pena, especialmente los vínculos que por relaciones familiares o residencia pudiere tener el condenado en la Argentina.

Si denegara la petición, podrá reservar la expresión del motivo de tal decisión.

Si el traslado fuese autorizado, el Ministerio de Justicia le dará intervención al juez de ejecución competente, a quien le remitirá todos los antecedentes del caso.

Art. 85. — Para que sea viable una petición de traslado, deberán cumplirse las siguientes condiciones:

- a) Que el condenado sea argentino al momento en que se presenta la solicitud;
- b) Que la sentencia de condena en el país extranjero sea definitiva y esté firme;
- c) Que el condenado haya dado ante una autoridad diplomática o consular argentina, y con asistencia letrada, su libre y expreso consentimiento al traslado, después de ser informado de las consecuencias;
- d) Que la duración de la pena pendiente de cumplimiento sea de por lo menos dos años al momento de presentarse el pedido;
- e) Que el condenado haya reparado los daños ocasionados a la víctima en la medida que le haya sido posible.

No importará para la concesión del traslado que el hecho cometido no sea delito para la ley argentina.

Art. 86. — Si la petición de traslado fuese presentada por el condenado, por sí o por terceros, el Ministerio de Justicia registrará al Estado de la condena, por vía diplomática, los siguientes antecedentes:

- a) Una copia de la sentencia;
- b) Una descripción de las circunstancias del delito que motivó la condena, si es que no surgieran de la sentencia;
- c) Una atestación acerca de que la sentencia es definitiva y está firme, del tiempo de pena que aún resta cumplir y de la fecha y hora exacta en que se cumplirá;

- d) Una completa información acerca de si el condenado ha reparado los daños ocasionados a la víctima en la medida que le haya sido posible, y sobre el comportamiento que haya tenido el condenado en el establecimiento carcelario donde estuvo cumpliendo la pena;
- e) Una declaración de que el Estado de la condena podría acceder al traslado en las condiciones establecidas por esta ley.

Al mismo tiempo instruirá un expediente con las pruebas aportadas por el solicitante del traslado que sean conducentes a los fines previstos por el segundo párrafo del artículo 84.

Art. 87. — Si la petición de traslado fuese efectuada por el Estado de la condena, deberá presentarse por la vía diplomática.

La solicitud contendrá, además de la documentación referida en el artículo anterior, el consentimiento dado por el condenado en la forma prescripta por el artículo 85 inciso c).

Art. 88. — El traslado se autorizará en las siguientes condiciones:

- a) La pena se cumplirá conforme las leyes y reglamentos vigentes en la Argentina, incluidas las normas referentes a la libertad condicional;
- b) Sólo el Estado de la condena podrá revisar la condena o conceder amnistía, indulto o conmutación de la pena;
- c) La Argentina pondrá el trasladado inmediatamente en libertad si recibe una orden en tal sentido del Estado de la condena;
- d) La persona trasladada gozará de la inmunidad prevista por el artículo 18;
- e) La Argentina informará periódicamente al Estado de la condena acerca de la forma en que se desarrolla el cumplimiento de la pena.

Art. 89. — El traslado se efectuará en el lugar y la fecha que se convengan. La Argentina se hará cargo de los gastos desde el momento en que la persona trasladada quede bajo su custodia.

CAPÍTULO 2

Condenas de ejecución condicional o de cumplimiento en libertad condicional

Art. 90. — El condenado por un tribunal de un país extranjero a cumplir una pena en régimen de condena condicional o libertad condicional, podrá cumplirla en la República Argentina bajo la vigencia de las autoridades argentinas.

Art. 91. — La solicitud deberá ser presentada por vía diplomática, y contendrá:

- a) Una copia de la sentencia definitiva y firme;
- b) Una completa información acerca de si el condenado ha reparado los daños ocasionados a la víctima en la medida que le haya sido posible;
- c) Información fehaciente sobre la fecha en que el condenado viajará a la Argentina, y sobre el otorgamiento de la visa que correspondiere;

d) Explicación acerca de las obligaciones asumidas por el condenado y del control que al respecto se requiere de las autoridades argentinas, con determinación de la fecha en que finalizará el control.

Art. 92. — Si el condenado fuese argentino, podrá presentar la solicitud por sí o a través de terceros a su nombre.

En tal caso el trámite se regirá por el artículo 84 en todo lo que fuese pertinente.

Art. 93. — El Ministerio de Justicia decidirá acerca de la solicitud.

No concederá la asistencia cuando las obligaciones asumidas por el condenado o las medidas de control requeridas contraríen la legislación argentina.

Si concediera la asistencia, le dará intervención al juez competente para que éste ordene, provea y fiscalice la ejecución de las medidas de control.

Art. 94. — La Argentina informará periódicamente al Estado de la condena acerca de la forma en que se lleva a cabo el control.

Asimismo comunicará de inmediato el incumplimiento por parte del condenado de las obligaciones asumidas, para que el Estado de la condena adopte las medidas que correspondan al caso.

CAPÍTULO 3

Condenas de multa o de decomiso de bienes

Art. 95. — Las condenas de multa o decomiso de bienes dictadas en un país extranjero, serán ejecutables en la República Argentina, a solicitud de un tribunal de aquel país, cuando:

- a) La infracción fuese de competencia del Estado requirente, según su propia legislación;
- b) La condena sea definitiva y esté firme;
- c) El hecho que la motiva constituya infracción punible para la ley argentina, aun cuando no tuviera previstas las mismas penas;
- d) No se dieran las circunstancias del artículo 8º párrafos a) a d);
- e) La pena no se haya extinguido según la ley del Estado requirente;
- f) El condenado no hubiese sido juzgado en la Argentina o en cualquier otro país por el hecho que motiva el pedido;
- g) El condenado hubiese sido personalmente citado y se haya garantizado su defensa;
- h) No existieren las razones especificadas en el artículo 10.

La ayuda no podrá consistir en la aplicación de una pena de prisión por conversión de la multa.

Art. 96. — El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto podrá convenir con el Estado requirente, sobre la base de reciprocidad, que parte del dinero o de los bienes obtenidos como consecuencia del trámite de ejecución, queden en poder de la República Argentina.

Art. 97. — La solicitud deberá ser presentada por vía diplomática.

El procedimiento administrativo será similar al establecido para los pedidos de asistencia de la investigación y juzgamiento de delitos.

El ministerio público fiscal representará en el trámite judicial el interés por la ejecución.

Art. 98. — El procedimiento judicial se regirá por las normas de los incidentes previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Durante su tramitación podrán adoptarse medidas cautelares.

Si el juez dispusiere la ejecución, se procederá según las normas con que ese Código regula la ejecución de sentencias argentinas.

Art. 99. — La multa se ejecutará por el monto y las condiciones establecidas en la condena. El monto se convertirá a la moneda argentina según la ley y prácticas del país.

Art. 100. — Los gastos extraordinarios que demande la ejecución serán a cargo del Estado requirente.

Art. 101. — El dinero o los bienes obtenidos serán depositados a la orden del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el que los transferirá o entregará a las autoridades del Estado requirente debidamente acreditados.

CAPÍTULO 4

Condenas de inhabilitación

Art. 102. — Las condenas de inhabilitación dictadas en un país extranjero serán ejecutables en la República Argentina, a solicitud de un tribunal de aquel país, bajo las condiciones establecidas en el artículo 95.

Art. 103. — La solicitud deberá ser presentada por vía diplomática.

El procedimiento administrativo será similar al establecido para los pedidos de ejecución de condenas de multa o de decomiso de bienes.

El ministerio público fiscal representará en el trámite judicial el interés por la ejecución.

Art. 104. — El procedimiento judicial se regirá por las normas de los incidentes previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Si las condiciones estuvieren cumplidas, el juez ordenará las medidas necesarias para hacer efectiva la inhabilitación en el territorio nacional.

TÍTULO II

Cumplimiento en el extranjero de condenas dictadas en la Argentina

CAPÍTULO 1

Condenas privativas de libertad

Art. 105. — Las penas privativas de libertad impuestas por un tribunal argentino a una persona que tenga nacionalidad extranjera, podrán ser cumplidas en el país de esa nacionalidad.

La solicitud podrá ser presentada por el condenado, por terceros a su nombre o por el Estado de esa nacionalidad.

Art. 106. — El trámite y las condiciones serán, análogamente, los prescriptos por los artículos 83 a 89.

El Ministerio de Justicia no podrá decidir el traslado del condenado, sin que:

- a) El condenado haya dado ante el juez de ejecución, y con asistencia letrada, su libre y expreso consentimiento al traslado, después de ser informado de sus consecuencias; y
- b) El juez de ejecución haya dado por cumplida la condición prevista en el artículo 85, inciso e), previa audiencia con citación de la víctima.

CAPÍTULO 2

Condenas de cumplimiento en libertad condicional

Art. 107. — El condenado por un tribunal argentino a cumplir una pena en régimen de libertad condicional, podrá cumplirla en un país extranjero bajo la vigilancia de sus autoridades.

Las condiciones serán, análogicamente, las prescriptas por los artículos 91 a 94.

Art. 108. — La solicitud deberá ser presentada ante el juez de ejecución.

La decisión de requerir la asistencia del país extranjero, será regida por las reglas de los artículos 62 y 65.

CAPÍTULO 3

Condenas de multa, de decomiso de bienes, y de inhabilitación

Art. 109. — La autoridad argentina que haya aplicado una condena de multa, de decomiso de bienes o de inhabilitación, podrá requerir que se ejecute la condena en un país extranjero.

Las condiciones serán, análogicamente, las prescriptas por los artículos 95 a 101.

Art. 110. — La decisión de requerir la asistencia del país extranjero será regida por las reglas de los artículos 62 y 65.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto podrá convenir con el país extranjero, sobre la base de reciprocidad, que parte del dinero o de los bienes obtenidos como consecuencia del trámite de ejecución de la pena de multa o de decomiso de bienes, quede en poder de aquel país.

PART E V

Competencia

Art. 111. — Será competente para conocer en un caso de extradición el juez federal con competencia penal que tenga jurisdicción territorial en el lugar de residencia de la persona requerida y que se encontrare en turno al momento de darse intervención judicial.

Si se desconociere el lugar de residencia o fueren varios y ubicados en distintas jurisdicciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto podrá optar entre cualquiera de los jueces federales que correspondan a tales lugares o un juez federal de la Capital Federal, siempre que estén en turno al momento de darse intervención judicial.

Art. 112. — Las mismas reglas previstas en el artículo anterior regirán para los casos de pedidos formales de arresto provisorio.

El juez que hubiese intervenido en el trámite de arresto provisorio, conocerá en la solicitud de extradición.

Art. 113. — En caso de arresto provisorio efectuado sin previa intervención judicial, será competente el juez federal con competencia penal que tenga jurisdicción territorial en el lugar donde se efectuare y que estuviera en turno al momento del arresto.

El mismo juez será el competente para conocer en la solicitud de extradición.

Art. 114. — Si una misma persona fuese sujeto de varios requerimientos de extradición, todos ellos tramitarán ante el juez que primeramente hubiese tomado intervención.

Art. 115. — En el caso previsto en el artículo 37, segundo párrafo, será competente el juez que intervino en la primera solicitud.

Art. 116. — Cuando se denegare una extradición por razón de la nacionalidad, será competente para entender en el proceso que deba seguirse al nacional el juez que intervino en la extradición.

Art. 117. — Los pedidos de reextradición o de autorización para juzgar a un extraditado por hechos anteriores a una concesión de extradición, serán de competencia del juez que intervino en el trámite de la extradición que motiva la solicitud.

Art. 118. — En los casos de los artículos 82 y 90, el Ministerio de Justicia dará intervención al juez nacional de ejecución penal que, en opinión del ministerio, sea el adecuado para beneficiar el cumplimiento de los objetivos del artículo 82 o para asegurar eficacia y simplicidad en las actividades de control, siempre que esté de turno al momento en que se dé intervención judicial.

Art. 119. — Los casos de los artículos 95 y 102, serán de competencia del juez en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal, cuando el condenado no tuviere domicilio en territorio argentino. Si el condenado se domiciliare en el país, conocerá la justicia de igual competencia con jurisdicción en el lugar del domicilio.

PART E VI

Disposiciones transitorias y de forma

Art. 120. — Las disposiciones procesales de la presente ley se aplicarán a los trámites de extradición pendientes, siempre que la causa no se hubiese abierto a prueba.

Si el trámite continuase regido por las normas del Código de Procedimientos en Materia Penal (ley 2.372), será de aplicación el artículo 31 de la presente ley. Una vez recaída sentencia definitiva serán también aplicables los artículos 35 a 39.

Art. 121. — Los actos procesales cumplidos con anterioridad a la vigencia de esta ley de acuerdo con las normas del procedimiento que se deroga, conservarán su validez.

Art. 122. — Las disposiciones de los artículos 23, 39 inciso a) segundo párrafo y 64, serán aplicables cuando la causa que corresponda a la jurisdicción argentina fuese de competencia nacional.

También se harán de aplicación a las causas de competencia provincial, en la medida en que cada provincia convenga en ello.

Art. 123. — Derógase la ley 1.612 y el libro cuarto, sección segunda, título V, artículos 646 a 674, del Código de Procedimientos en Materia Penal (ley 2.372).

Art. 124. — La presente ley entrará en vigencia a los treinta días de su publicación.

Art. 125. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor presidente.

ALBERTO R. PIERRI.
Esther H. Pereyra Arandía
de Pérez Pardo.

ACLARACION

El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto de ley de los diputados Hernández (A.M.) y Kelly.

Sr. Presidente. — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Quinzio. — (*Lee*) Señor presidente: el proyecto de ley de cooperación internacional en materia penal sancionado por la Honorable Cámara de Diputados viene a cubrir una impostergable necesidad regulatoria de dicha temática.

En efecto, el marco regulatorio actual está dado por la ley 1.612 de 1885 para la extradición pasiva y el único capítulo del ex Código de Procedimientos en Materia Penal — ley 2.372, mantenido en vigencia por el artículo 538, segundo apartado del actual — aplicable a la materia, data de 1888.

Como bien se ha señalado en los fundamentos del mensaje, la situación actual constituye un verdadero desfase legislativo con relación a los dos aspectos de la temática: uno, el procesal, y el otro, la falta de actualización sobre el fondo de la materia — desde que han pasado más de cien años y la realidad presente es totalmente diferente —.

En otro orden, es de absoluta necesidad contar con los instrumentos legales para la lucha contra todo tipo de delincuencia, para lo cual es imprescindible la cooperación entre los Estados, como ha sido reiteradamente marcado por acuerdos y congresos internacionales.

En cuanto al proyecto de ley en sí, debo señalar que fue aprobado por unanimidad de los miembros de las comisiones que tuvieron participación en su tratamiento y cuyo dictamen favorable tuvo en cuenta diversas opiniones que fueron requeridas — todas coincidentes, tanto en la necesidad del dictado de una ley en la materia como en lo que hace al contenido del proyecto aprobado, respecto del cual no se hicieron observaciones —.

Este proyecto se encuentra dividido en partes. La parte I contiene disposiciones generales, como son el compromiso de la República a prestar a cualquier Estado que lo requiera la más amplia ayuda relacionada con la investigación, el juzgamiento y la punición de los delitos que corresponden a la jurisdicción de aquél, así como también el mandato a las autoridades locales para que actúen con la mayor diligencia para la tramitación que se requiera, de forma tal que no se desnaturalice la ayuda.

También se establecen pautas de aplicación e interpretación de todo lo referente a la materia con relación a tratados, aplicación del principio de reciprocidad y algunos aspectos formales.

La parte II regula el tema de la extradición. En un primer título trata de la extradición pasiva, fijando las condiciones generales, el procedimiento, el trámite judicial, la decisión, la entrega de objetos y documentos, lo relativo a gastos, el arresto provisorio, a la reextradición y juzgamiento por otros hechos anteriores y a la extradición en tránsito.

De esta parte del proyecto de ley conviene destacar que para la procedencia de la extradición de una persona para ser sometida a un proceso, el hecho imputado debe constituir un delito para el que tanto en la ley argentina como en la del Estado requirente, debe estar prevista una pena privativa de libertad con un mínimo y máximo tales que la semisuma de los mismos sea, al menos, de un año. Y para el caso de que fuese solicitada para el cumplimiento de una pena se requerirá, además, que la pena que faltare cumplir fuese no menor de un año de privación de la libertad, al tiempo en que se presenta la solicitud.

Asimismo se prevé la regulación, en esta parte de la ley, para cuándo el delito previsto lo es en leyes penales en blanco y se establecen los supuestos en que la extradición no procede. En este último aspecto cabe señalar que tal situación se da para los casos de delitos políticos, delitos exclusivamente previstos en leyes penales militares, procesos tramitados por comisiones especiales, por las prohibidas en el artículo 18 de la Constitución Nacional, procesos realizados con evidentes propósitos persecutorios, con fundamentos discriminatorios de tipo político, racial, religioso, etcétera, cuando existan motivos fundados para suponer que el requerido pueda ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y, finalmente, cuando el delito tuviera prevista la pena de muerte en el Estado requirente y éste no diere seguridad de que no será aplicable.

En cuanto a los delitos políticos, se determina taxativamente cuáles no pueden ser considerados como tales. Se establecen los casos en que la extradición no se concederá, así como también todo lo relativo a las formalidades y requisitos que debe contener la solicitud. Se determina el procedimiento inicial —administrativo y decisorio— judicial. Y, en cuanto al arresto provisorio, se establecen las condiciones de procedencia, formalidades y se reglamentan minuciosamente las garantías pertinentes.

En lo que se refiere a la extradición activa, se determina que se atenderá a las reglas previstas en los tratados, cuando éstos existan. En los demás casos, se requerirá cuando, *prima facie*, fuese procedente conforme la ley del país donde se encuentra el requerido. Se fijan las formalidades, requisitos y el trámite con intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

La parte tercera del proyecto de ley en consideración comprende, señor presidente, lo relativo a la asistencia en la investigación y juzgamiento de delitos. En numerosos artículos se regula esa temática con precisión y minuciosidad.

La parte cuarta contiene lo relativo al cumplimiento de condenas. En el primer título, regula el cumplimiento de las dictadas en el extranjero. En este aspecto, en relación a las penas privativas de libertad, se prevé la posibilidad de que los nacionales condenados en un país extranjero puedan cumplir la pena en nuestro país. En tal sentido, se establecen las condiciones de procedencia, los requisitos formales y el procedimiento.

Para las condenas de ejecución condicional o de cumplimiento en libertad condicional, el condenado por un tribunal de un país extranjero podrá cumplirla en la República Argentina bajo la vigilancia de nuestras autoridades. También se regula lo relativo a las condenas de multa, decomiso de bienes e inhabilitación.

En un segundo título de la misma parte, se trata el cumplimiento en el extranjero de condenas dictadas en la Argentina, estableciéndose un sistema análogo a la inversa.

La parte quinta de este proyecto de ley trata lo relativo a la competencia, esto es cuál ha de ser el juez que habrá de entender en los distintos casos de extradición.

La última parte, la sexta, prevé disposiciones transitorias y de forma relativas a la aplicación de la ley y a los casos de tramitaciones pendientes, a

la validez de actos procesales cumplidos con anterioridad y a temas de competencia interna.

Por todo ello y dadas las opiniones de distinguidos especialistas que se han expedido sobre este tema y han informado de la necesidad de sancionar este proyecto, solicito a esta Honorable Cámara su aprobación.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Agúndez. — Señor presidente: voy a ser breve.

Efectivamente, como dijo el señor miembro informante, ésta es una norma de cooperación internacional en materia penal largamente estudiada en la Cámara de Diputados. Se trata de una iniciativa presentada por la señora diputada Elsa Kelly y por el señor diputado Antonio Mario Hernández. Hablo de la iniciativa presentada, porque es de autoría de los doctores Andrés José D'Alessio, Gustavo Adolfo de Paoli y Luis Camini.

La importancia de este proyecto de ley es, de alguna manera, actualizar la legislación en materia de extradición toda vez que cuando se aprobó el Código de Procedimiento en materia de enjuiciamientos penales no se trataron normas al respecto. Por lo tanto, se sigue con la legislación vieja a este respecto.

En consecuencia, creo que éste es un adelanto bastante importante y hay unanimidad en cuanto a su tratamiento.

En honor al tiempo, diré que el bloque de la Unión Cívica Radical va a acompañar la aprobación de esta iniciativa.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: yo había preparado una exposición en mi carácter de presidente de la Comisión de Interior y Justicia, que es una de las comisiones a la que fue girado este proyecto para su tratamiento. Pero en realidad la exposición del señor miembro informante de la comisión cabeza ha sido exhaustiva, de modo que me limitaré a solicitar la inserción de mi discurso en el Diario de Sesiones.

Evidentemente, lo que vamos a sancionar aquí constituye un notable progreso en la materia; progreso que viene avalado por la experiencia internacional y también por la jerarquía científica y la propia experiencia de los autores de la iniciativa en la Cámara de Diputados.

Creo que, sin duda alguna, con el instituto que hoy vamos a aprobar, actualizaremos las normas vigentes en materia de extradición,

normas que al día de la fecha pueden parecer realmente anacrónicas.

Por esto, considero que sin duda vamos a realizar un aporte importante a nuestra normativa jurídica. Así, en coincidencia con mi voto afirmativo en el dictamen de comisión y reiterando mi pedido de inserción de mi discurso, adelanto mi voto afirmativo al proyecto.

—Asentimiento.

—El texto de la inserción solicitada es el siguiente:

Señor presidente:

Entiendo que constituye un notable avance en materia de cooperación internacional este proyecto de ley mediante el cual se regulan los aspectos referentes a la prestación de ayuda relacionada con la investigación, el juzgamiento y la punición de delitos, cuando las circunstancias de la comisión de los ilícitos obliguen a diferentes Estados a brindar un imprescindible apoyo en sus respectivas jurisdicciones internas.

Las normas hasta hoy vigentes en nuestro país que regulan la extradición son del siglo pasado, y evidentemente, deben ser objeto de una actualización imprescindible, toda vez que las circunstancias del presente tornan vetustas varias de esas previsiones.

He firmado el dictamen de comisión aconsejando aprobar el proyecto tal como ha venido en revisión de la Cámara de Diputados, en la inteligencia de que su sanción implicará un notable progreso en esta materia.

El proyecto contempla varias instituciones. Por de pronto, lo referente a la extradición en su aspecto pasivo, esto es, en los casos en que el Estado requirente es una nación extranjera y el presunto delincuente se encuentra en nuestro territorio.

Se fijan ciertos recaudos para su procedencia, referentes a la entidad y a la gravedad del delito; en efecto, conforme lo establece el artículo 6º, el hecho que motiva el pedido de extradición deberá constituir delito tanto para la ley argentina como para la ley del Estado requirente. En lo que hace a la importancia del delito, debe tratarse de hechos que revistan cierta gravedad, y es por eso que se prescribe que la semisuma del mínimo y el máximo de pena privativa de libertad no sea inferior a un año.

Se fijan con toda precisión y minuciosidad los supuestos en que no procederá la extradición, entre los cuales se cuentan los clásicos ejemplos de los delitos políticos, delitos militares o que existan motivos de mera persecución política, racial, o religiosa. Sin perjuicio de ello, se determina en qué supuestos no se considera que el hecho es un delito político, tales como los crímenes de guerra, los de lesa humanidad o los actos de terrorismo.

Al margen de la procedencia formal de la extradición, es decir, que se cumplan los recaudos sustanciales para su concesión, se determinan los casos en que el juez requerido la rechazará por motivos que se vinculan con la extinción de la acción o de la pena, la cosa juzgada, las causas de inimputabilidad, o razones procesales, como lo determina el artículo 11.

Se acuerda a los nacionales la opción de ser juzgados por los tribunales del país, con la excepción de que la ex-

tradición deviniera obligatoria en virtud de un tratado con el estado requirente.

Los recaudos formales del pedido de extradición se detallan con mucho celo en los artículos 13 y 14 del proyecto, y su cumplimiento debe ser verificado por las autoridades del país requerido.

En lo que concierne al procedimiento, éste se divide en dos partes, el trámite administrativo y el judicial.

La etapa administrativa es cursada por la vía diplomática, con la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

En cuanto a la faz judicial, con buen criterio se señala que no son aplicables en principio las normas establecidas para la eximición de prisión o extradición.

La sentencia judicial, ya sea que conceda o rechace el pedido de extradición, es susceptible de un recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme lo prevé la ley orgánica de la Justicia nacional.

Lo referente a la extradición activa, es decir, cuando nuestro país es el requirente, está regulado en los artículos 62 y siguientes del proyecto. Se determina, como condición, que deberá tenerse en cuenta si ella resultare procedente conforme la legislación del país donde se encuentre la persona requerida. Si fuera aplicable un tratado, se aplicarán sus reglas, las que habrán de prevalecer entre los países firmantes.

En lo que respecta al cumplimiento de condenas deben distinguirse dos supuestos; en primer lugar, los casos en que la condena haya sido dictada en el extranjero y ella deba cumplirse en nuestro país, y en segundo término, las que habiendo sido dictadas por un tribunal argentino, deban ser cumplidas en un país extranjero.

En cuanto a lo primero, el artículo 82 consagra la posibilidad de que las penas privativas de libertad impuestas por un tribunal extranjero respecto de condenados argentinos, puedan ser cumplidas en nuestro país, bajo determinadas condiciones, las que se enumeran con toda precisión y minuciosidad.

Referente a lo segundo, el artículo 105 prescribe que las penas privativas de libertad impuestas por un tribunal de nuestro país con respecto a un condenado extranjero, podrán ser cumplidas en el país de su nacionalidad, debiendo cumplirse condiciones análogas al primer supuesto.

La competencia para los casos de extradición es federal, correspondiendo al juez que tenga jurisdicción territorial en el lugar de residencia de la persona requerida.

He querido hacer una rápida y apretada síntesis de los principales aspectos de este proyecto. Entiendo que debe aprobarse para actualizar la materia de la extradición que está regida por normas que hoy aparecen anacrónicas.

Por estas razones, apoyo la iniciativa, convencido de que con su sanción habremos de cumplir el postulado del preámbulo de la Constitución Nacional que ordena afianzar la Justicia.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Quinzio. — Señor presidente: dado que hay unanimidad en el criterio de los bloques

para la aprobación de este proyecto de ley, voy a solicitar que la votación sea por capítulo.

Sr. Presidente. — Si media asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente. — Como no hay quórum, solicito a los señores auxiliares de bloques que colaboren con la Presidencia para formarlo.

—Se llama para votar.

Sr. Solana. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por el Neuquén.

Sr. Solana. — Señor presidente: por la forma en que está articulado el proyecto de ley que estamos considerando, que es muy extenso, solicito que en lugar de votar por capítulos lo hagamos por partes, si está de acuerdo el señor presidente de la comisión.

Sr. Presidente. — Si media asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente. — Como hay asentimiento, se procederá en consecuencia.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar en general.

—La votación resulta afirmativa.

—En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

6

MANIFESTACIONES SOBRE EL PLAN DE LABOR

Sr. Alasino. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. — Señor presidente: quisiera hacer un chequeo de los temas a tratar.

Sr. Presidente. — Después del Orden del Día N° 1.564, sigue el orden del día correspondiente al tema de transferencia de inmuebles, el proyecto del señor Zalazar sobre emergencia agropecuaria, un proyecto del señor senador Yoma sobre desfasajes en el presupuesto '97 con relación al Poder Judicial y al Ministerio Público, un proyecto de la senadora Fernández Meijide y juicio político.

Sr. Alasino. — Señor presidente: quería dejar aclarado lo siguiente. Hay intención de este bloque en el sentido de sesionar la semana siguiente a Navidad.

Atento a que la Cámara de Diputados sesionaría el 26, nosotros proponemos que, saliendo del esquema previsto en el sentido de sesionar miércoles y jueves durante este período extraordinario, sesionemos el viernes 27.

Sr. Presidente. — ¿A qué hora?

Sr. Alasino. — A las 11.

Sr. Presidente. — Se va a votar la moción del senador Alasino en el sentido de que el cuerpo sesione el viernes 27 de diciembre a las 11.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Se procederá en consecuencia.

7

TRANSFERENCIA DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO NACIONAL

Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda, en el proyecto de ley en revisión por el que se modifica la ley 24.146 y su modificatoria, ley 24.383, sobre transferencia de inmuebles propiedad del Estado nacional.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Piuze). — (Lee)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley en revisión (C.D.-136/96), modificando la ley 24.146 (y su modificatoria 24.383), sobre transferencia de bienes inmuebles propiedad del Estado nacional; y, por sus fundamentos, os aconsejan su aprobación.

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 120 del reglamento del Honorable Senado, pase este dictamen directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 17 de diciembre de 1996.

Jorge J. Massat. — Julio A. San Millán. — Horacio A. Zalazar. — Carlos A. Verna. — Edgardo Gagliardi. — Enrique Martínez Almudevar. — Jorge A. Villaverde. — César Mac Karthy. — Luis A. León. — Cristina Fernández de Kirchner. — Emilio M. Cantarero. — Augusto J. M. Alasino. — Juan C. Oyarzún. — Héctor M. Maya. — Ricardo A. Branda. — José L. Gioja. — Antonio T. Berhongaray.